

LA ESPERANZA DE HOY, UNA AMENAZA MAÑANA

Carlos Segundo Barrera Sánchez¹

Antes de abordar los puntos centrales de este escrito, y con el interés de profundizar en el entendimiento de la problemática de inseguridad que persiste en Colombia, y abordarla de la manera adecuada, es necesario ratificar una y otra vez que lo que vive el país desde hace casi 50 años es un conflicto armado de carácter interno (o no internacional), claridad que se hace importante en ocasión a la ya vieja discusión que persiste entre quienes definen la realidad nacional como una lucha anti terrorista, y entre quienes la definen como un conflicto armado interno.

Ahora bien, partiendo por reconocer los esfuerzos y desgastes que el Gobierno Nacional ha hecho en las negociaciones que se desarrollan en La Habana, hay que decir con preocupación que LA NEGOCIACIÓN DE PAZ CON LAS AUTODENOMINADAS FARC-EP (Y EVENTUALMENTE CON EL AUTODENOMINADO ELN) CONSTITUYEN UNA AMENAZA A LA SEGURIDAD CIUDADANA Y URBANA PARA LA SOCIEDAD COLOMBIANA EN POSCONFLICTO.

Los anhelos de paz de todos los colombianos, que rechazan las más de 220.000 muer-

tes violentas ocurridas entre 1958 y 2012² no pueden servir para ocultar las preocupaciones que se ciernen sobre el proceso de negociación que actualmente adelanta el Gobierno Nacional. Las razones de la preocupación y causa de la determinación de la actual negociación de paz como amenaza a la seguridad ciudadana en el posconflicto se resumen en la casi nula preparación de las autoridades nacionales para entender y afrontar el posconflicto. Y esta razón a su vez se sustenta en tres sentidos, a saber:

- 1) **Las causas que generaron el surgimiento del conflicto armado en la década del 60 (incluso antes) no serán resueltas en el corto ni mediano plazo a pesar del desarrollo y conclusión de uno o dos procesos de paz con la insurgencia.** A pesar de la cruzada emprendida por el gobierno del Doctor Álvaro Uribe Vélez, empeñado en desconocer el conflicto armado colombiano en contra de todas las señales que claramente lo mostraban como tal, hoy la caracterización de la violencia en Colombia define lo acontecido desde el siglo pasado como una lucha en contra de varios grupos subversivos, que con

¹ Ingeniero Electrónico, Especialista en Administración de la Seguridad, Diplomado en Ciudades Seguras y candidato a Magister en Seguridad Pública. Consultor en seguridad ciudadana.

² GMH. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional, 2013.



tácticas terroristas, absolutamente reprochables, desarrollaron una guerra contra el Estado con el propósito de cambiar el statu quo de concentración de riquezas y poder, corrupción, desempleo, mala distribución de la tierra, subdesarrollo, carencias alimentarias, de educación y de salud que aquejaban (y aquejan) al país. Las circunstancias de atraso y precariedad mencionadas siguen presentes en la realidad nacional, y no hay información disponible que muestre que cambios estructurales en lo social, económico y político están prontos a llegar.

La consecuencia de la que el mundo será testigo en los próximos meses será la firma, más no la construcción de la tan nombrada paz duradera y estable. Con el pasar de los meses, luego de la firma de la paz con uno o con los dos grupos subversivos, el descontento regresará para reemplazar las falsas esperanzas creadas entorno a una Colombia mejor, y serán aquellos mismos factores generadores del conflicto en el siglo pasado (desigualdad social, desempleo, distribución inequitativa de la tierra, subdesarrollo, abusos laborales, prestación ineficiente de servicios de salud y educación, etc.), los que servirán de motivación para nuevas luchas. No serán en ese momento 10.000, 11.000 o 12.000 hombres y mujeres alzados en armas, sino todo un país actuando, protestando, marchando y criticando para buscar desestabilizar a los poderes formalmente constitui-

dos. Si bien es cierto, la historia y tradiciones colombianas no muestran a sus ciudadanos como los de mejores capacidades de agremiación social por un bien común, el descontento social será de tal magnitud, que aunado a la frustración de un proceso de negociación de paz superficialmente llevado, las masas encontrarán la manera de protestar, y la violencia, y con ella la inseguridad serán pan de cada día.

El actual proceso de paz en La Habana y cualquier otro que pueda generarse con el autodenominado Ejército de Liberación Nacional (con quienes hay indicios de acercamientos exploratorios secretos) no parecen concentrar sus esfuerzos en la solución de los problemas estructurales del país, sino en el fortalecimiento de plataformas políticas (reeleccionistas o no) que responden a intereses particulares de las clases tradicionalmente en el poder. Esto claramente se constituye en una amenaza hoy a la seguridad de la Colombia del posconflicto mañana.

- 2) **El débil y poco planeado proceso de reincorporación de los que actualmente están alzados en armas no ofrecerá garantías reales de cese de la violencia y la delincuencia en la Colombia del posconflicto.** Se estima y se espera que las intenciones sean las mejores, pero si el Gobierno Nacional no se prepara y no prepara a la sociedad (población civil y sociedad civil) para recibir a los excom-

batientes como nuevos y activos ciudadanos, la violencia pasará rápidamente de los campos a las ciudades.

La anterior experiencia de negociación y paz con las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el gobierno anterior mostraron que el silencio paramilitar de los fusiles en zonas rurales se convirtió con agilidad en la apertura de la más oscura época de inseguridad ciudadana en las principales capitales. Poco se habla de manera institucional de este fenómeno, pero en cambio muchísimo se comenta en pasillos, en la calle, en la academia y en conversaciones privadas acerca de cómo una fuerte porción de los 31.671 desmovilizados de las autodenominadas AUC³ pasaron a la nómina de grupos emergentes y bandas criminales como las misteriosas Águilas negras, o los autodenominados Rastrojos o Urabeños. Así mismo, una porción no despreciable pasó a engrosar las filas de la delincuencia común en las ciudades colombianas. El fenómeno “migratorio” obedeció a nexos previamente existentes con nacientes estructuras del narcotráfico, o simplemente obedeció al triste hecho que los antiguos combatientes del paramilitarismo encontraron en la delincuencia común y organizada su espacio natural en donde explotar todas sus arraigadas habilidades criminales.

Lo concreto es que según la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, se estima que un 17% de los miembros desmovilizados del paramilitarismo pasaron a hacer parte de nuevas estructuras criminales creadas presuntamente durante el proceso de desmovilización, sin aparentes intenciones de continuidad como autodefensa, pero sí con el firme propósito de copar territorios estratégicos para el narcotráfico dejados por las estructuras desmovilizadas⁴.

Adicional a lo anterior, y a la dificultad social, psicológica, personal, política y comunitaria que siempre existirá para que un actor del conflicto armado se reincorpore a la sociedad, en Colombia la población no está preparada para recibir en sus barrios y ciudades a excombatientes que durante años los medios masivos de comunicación vendieron como los responsables de crímenes atroces. Y aunque los medios de comunicación no han mentido en señalar a la subversión como los culpables de innumerables actos delictivos, la imagen criminal de la subversión en Colombia es tan profunda que para el ciudadano de a pie será muy difícil verlos como compañeros de trabajo, empleados, jefes, padres de familia del colegio de los niños, en el gimnasio, en el centro comercial o como líderes políticos.

3 La desmovilización: el proceso de paz (2003-2006). www.verdadabierta.com.

4 Disidentes, rearmados y emergentes: ¿bandas criminales o tercera generación paramilitar?. Informe No. 1. Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Bogotá. 2007.



Así las cosas, no es difícil concluir que muchos de aquellos excombatientes que dejaron sus armas convencidos de un país mejor, se volcaron a la delincuencia como única alternativa viable de sustento familiar una vez fueron señalados y discriminados social y laboralmente. Otros, seguramente no tan convencidos de la desmovilización, encontraron la excusa perfecta para retornar y realizar lo que mejor aprendieron a hacer durante años: delinquir.

Este panorama tiene todas las probabilidades de repetirse con el actual proceso de negociación con las autodenominadas FARC-EP. No se visibiliza en la estrategia del Gobierno Nacional cuáles serán los mecanismos que se aplicarán para una acertada reincorporación de los excombatientes. Ante esta situación surgen entonces los siguientes interrogantes: a que se dedicarán los desmovilizados?, en que serán capacitados y por quién?, que empresas, o mejor, que industrias se comprometerán con la contratación laboral de los desmovilizados insurgentes?, Donde vivirán y como serán recibidos los desmovilizados en los barrios donde pretendan vivir?. Las respuestas adecuadas y requeridas por la sociedad no son imposibles de construir, pero si el Gobierno Nacional no se prepara y no prepara a la comunidad empresarial, industrial, residencial y ciudadana, las consecuencias serán no una amenaza a la seguridad sino una agresión.

3) **No hay garantías ni preparación en las autoridades nacionales para la aplicación de modelos exitosos de justicia transicional.** Con los actuales avances en tiempo y resultados del proceso de negociación con las autodenominadas FARC-EP, es hora que el Gobierno Nacional dé a conocer con detalle cuáles serán los mecanismos y escenarios de justicia transicional que serán aplicados con este grupo insurgente. La falta de claridad actual tiene al país sumido en un debate que polariza y fomenta el descontento social. Las voces de oposición hablan de impunidad mientras el Gobierno Nacional desgasta sus discursos defendiendo el proceso, pero lo cierto es que no hay información suficiente para evaluar cómo será la transición luego de concluidos los diálogos de La Habana, y la incertidumbre genera temor, que puede convertirse en caos, y luego en inseguridad.

El viejo debate entre sí para lograr la paz se requiere algo de impunidad en sociedades en conflicto toma una especial importancia en Colombia en donde no parece haber intenciones de perdón en muchos sectores estratégicos del país.

Democracias frágiles, dice Martha Minnow, optan por tratar de seguir adelante después de períodos de violencia colectiva, para evitar la atmósfera de confrontación que se puede generar en los

procesos judiciales⁵, pero los defensores de derechos humanos, sostiene Natalia Springer, argumentan que esconder bajo la alfombra las violaciones cometidas en el pasado no solo es moralmente incorrecto, sino políticamente peligroso, en cuanto un ambiente de impunidad solo contribuye a la profundización de las heridas y a fomentar las divisiones de la sociedad del posconflicto⁶.

Podría parecer apresurado exigirle al Gobierno Nacional que muestre sus cartas formales acerca del proceso de transición y posconflicto que se desprenderá de La Habana, pues en principio habría que decir que hoy no hay nada firmado formalmente, pero ante los antecedentes conocidos durante la aplicación de la Ley 975 del 25 de julio de 2005, conocida como la Ley de Justicia y Paz, las preocupaciones por la transición y el posconflicto como amenaza a la seguridad no pueden obviarse. Al respecto, el balance de la mencionada ley arroja 39.546 hechos confesados en justicia y paz, 51.906 víctimas relacionadas con los hechos confesados y tan solo 14 postulados con sentencia en Justicia y Paz⁷, lo que se constituye en una clara muestra de la falta de preparación, disposición e infraestructura que ha evidenciado el Gobierno Nacional (y su aparato judicial) en el pasado reciente, y el presente, para aplicar mecanismos de justicia transicional.

En oposición al argumento que sugiere que hablar de normas para el posconflicto es apresurado hay que recordar que cuando el país no contemplaba la real posibilidad de diálogos con las autodenominadas FARC-EP, el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos expidió el Marco Jurídico para la Paz. Hoy se sabe que para ese momento (la salida a la luz del Marco Jurídico para la Paz) el Gobierno Nacional adelantaba la fase exploratoria secreta con la insurgencia, situación que generó entre los entendidos (con excepción de la oposición), una positiva sensación de previsión, toda vez que antes de la instalación formal de Oslo ya la ley estaba en trámite.

Esta misma previsión es necesaria en lo que a justicia transicional y posconflicto se refiere, porque un revés en esta parte del proceso traerá como consecuencia el deterioro notorio de la seguridad en las ciudades colombianas. La oferta de circunstancias inapropiadas producto de un posconflicto asumido sin preparación sería abultada: militares pagando condenas por actuaciones en medio de la guerra; excombatientes de la insurgencia en las calles sin poder laborar, excluidos y señalados por la sociedad; excombatientes de la insurgencia laborando sin la preparación adecuada; excombatientes con delitos atroces no juzgados por la falta

5 Martha Minow, *Between Vengeance and Forgiveness: Facing History after Genocide and Mass Violence*, Boston: Beacon Press, 1998, p. 28. Traducción libre tomada del libro *Negociar la paz o hacer justicia?* De Natalia Springer.

6 *¿Negociar la paz o hacer justicia?*. Natalia Springer. ISBN: 978-958-704-985-5. Aguilar. Bogotá D. C., 2010.

7 GESTION UNIDAD NACIONAL DE FISCALÍAS PARA LA JUSTICIA Y LA PAZ. Informe en medio magnético a 1 de diciembre de 2012 publicado en www.verdadabierta.com, link ESTADÍSTICAS de la página de inicio.



de infraestructura; cabecillas de la insurgencia ejerciendo actividades políticas en congreso, alcaldías, concejos, asambleas y gobernaciones; víctimas débilmente reparadas; cárceles insuficientes; tierras repartidas entre pocos (incluyendo en esos pocos a la insurgencia); ausencia de mecanismos efectivos para conocer la verdad; reforma agraria lograda en negociación aplicada con precariedad y exclusión; son todos los ingredientes necesarios para que mezclados se obtenga un nefasto coctel de violencia en las ciudades y en el campo colombiano.

Esta que se ha descrito hasta aquí es entonces una vieja amenaza, la de la inseguridad venida por vía del descontento, la protesta social y la debilidad institucional que surge y se desarrolla como consecuencia de un proceso de negociación con la insurgencia, desarrollado sin las rigurosidades, las capacidades y la proyección de nación adecuada. Sería además, una vieja amenaza, con un nuevo ropaje, en la medida en que el país será testigo de viejas violencias, urbanas y rurales, surgidas como consecuencia de un nuevo proceso de transición y posconflicto. Lo crítico y curioso del asunto es que el nuevo ropaje será justamente el generador de confusión y distracción en la opinión pública y en las comunidades, pues la esperanza de paz que albergan los corazones de TODOS los colombianos, y que se fortalecerá con los anuncios de la firma de los acuerdos de La Habana, no dejarán ver en el corto plazo las

manifestaciones violentas de un posconflicto inapropiadamente organizado.

¿Cómo abordar esta amenaza a la seguridad?. A manera de conclusión hay que decir que la prevención y la anticipación (como en el combate de toda amenaza), son los únicos y útiles caminos para el tratamiento de esta situación, que requiere un replanteamiento desde lo institucional del proceso de negociación con los dos grupos insurgentes presentes en el territorio nacional. Es necesario que la sociedad civil apoye al Gobierno Nacional (y viceversa) en la búsqueda de mecanismos de anticipación que permitan trabajar y facilitar desde ya la construcción del escenario ideal nacional posconflicto.

La paz como anhelo de TODOS los colombianos obliga a continuar de manera decidida en la búsqueda del fin del conflicto a través de la negociación política, pero la tarea no culmina ahí. Esta precisión es de vital importancia para entender que mientras avanzan las necesarias conversaciones de paz, las instituciones colombianas desde lo municipal, departamental, y nacional (principalmente estas últimas) deben prepararse para el posconflicto y de manera casi simultánea, deben además preparar a la población civil.

La guerra definitivamente no es la solución, pues la guerra *“es en sí mismo una situación desviada en extremo. Es una de las pruebas más flagrantes de la irracionalidad humana, que pretende resolver por la fuerza las con-*



*tradiciones y conflictos creados por esa misma irracionalidad*⁸. Continuar en conflicto como lo motivan y hasta defienden ciertos sectores de la sociedad representados y dirigidos por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y otros, con el argumento de derrotar a toda costa al enemigo terrorista, se constituye no en una amenaza para la seguridad, sino en una clara agresión en progreso que no puede seguir siendo alimentada. Pero así mismo, la paz negociada, sin cambios estructurales ni abordaje social, económico y político, sin preparación para el posconflicto y sin articulación activa entre el gobierno y la población pueden convertirse en el camino ideal para la venida de nuevas y crueles violencias.

El esporádicamente mencionado en medios Ministerio de la Seguridad Ciudadana que estructurará y seguramente liderará el General en retiro Oscar Adolfo Naranjo Trujillo, ex Director General de la Policía Nacional, es una buena señal de preparación para el posconflicto, que además deja entrever que será justamente esta institución la llamada a apoyar y a hacer realidad en las calles el proceso de transición. Pero no es suficiente, pues se requiere a todo el aparato estatal adiestrado, adoctrinado, modernizado y en función del posconflicto.

En este sentido, algunas de las necesidades y medidas requeridas dentro del proceso de transición y preparación nacional para el posconflicto deberían incluir modernización

del aparato judicial; desmilitarización de la Policía Nacional; sensibilización permanente a comunidades y sector empresarial e industrial acerca del posconflicto; identificación y reparación integral a víctimas del conflicto armado; restitución activa y real de tierras con garantías para las víctimas; reacomodamiento y redireccionamiento de los roles, funciones y competencias de las fuerzas militares; puesta en marcha de una Comisión de la Verdad; fomento al levantamiento de la memoria histórica (el informe ¡BASTA YA!⁹ ha sido un buen inicio); implementación de mecanismos de reparación simbólica colectiva (monumentos, medallas y reconocimientos) para víctimas del conflicto armado; sensibilización a medios masivos de comunicación sobre su rol de apoyo y construcción de memoria y verdad en el posconflicto; sensibilización a sectores productivos para la generación de empleos a población desmovilizada; fomento de diálogos víctima-victimarios para la sanación de heridas y descentralización y fortalecimiento de las regiones como entidades con autonomía para el desarrollo, entre otros.

La paz es posible, y también lo es la construcción de una sociedad en posconflicto que sin violencia pueda caminar con éxito hacia las sendas del desarrollo, pero se requiere de la participación de todos y de la voluntad política de un gobierno que debe desprenderse de su propia agenda e intereses particulares para poder avanzar.

8 CRIMINOLOGÍA: UN ENFOQUE HUMANÍSTICO. Jorge Restrepo Fontalvo. Tercera Edición. ISBN 958-35-0395-9. Editorial Temis. Bogotá D. C., 2002.

9 GMH. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional, 2013



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. GRUPO DE MEMORIA HISTÓRICA. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional, 2013.
2. La desmovilización: el proceso de paz (2003-2006). www.verdadabierta.com
3. COMISIÓN NACIONAL DE REPARACIÓN Y RECONCILIACIÓN. Disidentes, rearmados y emergentes: ¿bandas criminales o tercera generación paramilitar?. Informe No. 1. Bogotá. 2007.
4. MINOW, MARTHA: *Between Vengeance and Forgiveness: Facing History after Genocide and Mass Violence*, Boston: Beacon Press, 1998.
5. SPRINGER, NATALIA: ¿Negociar la paz o hacer justicia?. ISBN: 978-958-704-985-5. Aguilar. Bogotá D. C., 2010.
6. GESTIÓN UNIDAD NACIONAL DE FISCALÍAS PARA LA JUSTICIA Y LA PAZ. Informe en medio magnético a 1 de diciembre de 2012 publicado en www.verdadabierta.com, link ESTADÍSTICAS de la página de inicio.
7. RESTREPO FONTALVO, JORGE: *Criminología: un enfoque humanístico*. Tercera Edición. ISBN 958-35-0395-9. Editorial Temis. Bogotá D. C., 2002.